

Ejército, subjetividades y memoria colectiva en Ayutla de los Libres, Guerrero*

Marcela Orraca Corona**

Resumen

En Ayutla de los Libres, Guerrero, la presencia del ejército ha sido fundamental en los procesos de construcción de subjetividades y memorias colectivas. Dicha presencia se ha intensificado a raíz de la guerra contra el narcotráfico, se ha infiltrado en el tejido social, y ha conducido a la formación de dos bandos en algunas comunidades, cada uno con sus propios ejercicios de memoria colectiva. Aunque el origen de la división radica en una estrategia estatal para debilitar la organización local, los movimientos sociales se apropian de ella y utilizan selectivamente la memoria para construir las identidades de los *ellos* y los *nosotros*, y fortalecer los sustentos de su lucha. El riesgo reside en que este ejercicio, que resulta en dos subjetividades antagónicas, diluya los elementos compartidos y desdibuje la capacidad organizativa de la población, y con ello la posibilidad de concebir futuros en común.

Palabras clave: militarización, organización, memoria colectiva, identidad.

* Las reflexiones presentadas en este texto, se basan en la investigación realizada por la autora en Ayutla de los Libres, entre 2009 y 2010, para la elaboración de su tesis de licenciatura: "Narrativas en torno a la presencia del ejército mexicano en Ayutla de los Libres, Guerrero, impacto en el tejido social y reacciones de la sociedad civil".

** Licenciada en relaciones internacionales por la Universidad de las Américas. Estudiante de la maestría en desarrollo rural, UAM-Xochimilco; [marce.orraca@gmail.com].

Abstract

In Ayutla de los Libres, Guerrero, the army's role throughout history has been a key element in the construction of subjectivities and social memories. The war against drugs has strengthened the presence of the armed forces and their infiltration into the social fabric, leading in some communities to the formation of two factions, each with its own exercises of collective memory. Although these fractures have their origin in a government strategy to weaken local organization, certain social movements have learnt to use the fissures for their own purposes. In an exercise of selective memory, "us" and "them" are outlined within the community, which help strengthen the movements' identities and their struggles. In this context of violence, references to the present and the immediate past substitute the allusions to the distant past, which now seems drowned in silence. The risk is that this exercise, which leads to two antagonistic subjectivities, ends up diluting the common elements, and blurring the possibility of imagining shared futures.

Keywords: militarization, organization, collective memory, identity.

Introducción

En las historias que cuentan las personas de Ayutla de los Libres,¹ aparecen constantemente una serie de personajes a los que la gente identifica como los *guachos*. Estos personajes, que al parecer impactan de manera directa o indirecta la vida de gran cantidad de ayutlenses, son lo que en otras historias se identifica como soldados. Sin embargo, las dos palabras no son sinónimos: así como cambia el nombre, parece que cambiara también la figura, o lo que ésta representa. Los soldados en México, según la encuesta de Ipsos Bimsa y *El Universal* (2007), son solidarios (80%), honestos (68%), tolerantes (63%) y respetuosos de los derechos humanos (64%). Los guachos en Ayutla,

¹ La información sobre las opiniones de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Mepha'a (OPIM) se obtuvo en entrevistas realizadas por la autora en Ayutla de los Libres, en 2009 y 2010.

según algunos sectores de la población, son abusivos, represores y perversos, e incurren en graves violaciones a los derechos humanos. De esto se deriva que gran parte de la población siente miedo y desconfianza hacia los integrantes del ejército. ¿De dónde vienen estas interpretaciones? ¿Qué tipo de subjetividades se construyen en una comunidad en torno a la presencia del ejército? ¿Qué sucede cuando la utilización de la memoria por parte de un grupo resulta en subjetividades que excluyen a otros grupos dentro de la misma comunidad?

En el presente texto, reflexiono sobre el impacto de la presencia del ejército en la construcción de identidades al interior de una comunidad indígena rural, ubicada en Ayutla de los Libres, Guerrero. Sostengo que la violencia generada por el ejército, así como la estrategia de infiltración en las comunidades, deriva en la construcción de comunidades políticas antagónicas al interior de una misma comunidad geográfica. Las narrativas en torno de estas comunidades políticas pueden ser tan poderosas que desdibujen algunos de los elementos en las memorias colectivas que constituyen un referente común para la mayoría de la población. Aunque el conflicto entre ambos bandos pudiese ser una situación coyuntural o pasajera, la repetición de estas narrativas implica un riesgo para la capacidad organizativa de la población, actual y futura. Sobre todo porque las generaciones más jóvenes están heredando una memoria colectiva que incorpora este antagonismo, en la cual los referentes comunes parecieran no tener un lugar. Argumento también que, si bien la militarización de esta región responde a una estrategia estatal para debilitar la organización social, los propios movimientos locales han profundizado las divisiones al apropiarse de un discurso antagónico para justificar o fortalecer sus causas.

El texto está dividido en cuatro secciones. La primera se refiere a la presencia histórica del ejército en la región de la Costa Chica de Guerrero, así como al surgimiento de grupos guerrilleros. Dicha presencia se remonta a la década de 1960, durante la “guerra sucia”, pero se ha intensificado en el último sexenio a raíz de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe Calderón. En la segunda sección, describo la manera en la que ciertos sectores de la población ayutlense incorporan a la figura de los soldados en

sus narrativas, en un ejercicio de memoria selectiva, a partir del cual surgen dos bandos opuestos. Si bien el origen de la división radica en una estrategia estatal para debilitar la organización local, los movimientos sociales locales se apropian de ella, y utilizan selectivamente la memoria para construir las identidades de los *ellos* y los *nosotros*, y así fortalecer los sustentos de su lucha. En la tercera sección, con el caso de la comunidad de El Camalote ejemplifico el rompimiento del tejido social como consecuencia de la violencia del ejército en la comunidad. Destaco la manera en la que el conflicto se está heredando a las generaciones más jóvenes. En la última sección, presento algunas reflexiones sobre las implicaciones que este proceso de construcción y transmisión de la memoria colectiva tiene sobre la capacidad organizativa de la población.

Para la conceptualización, recurro a Carlos Zambrano quien concibe la memoria colectiva como “construcción reflexiva de referentes para la acción colectiva y no la huella de los recuerdos y los olvidos de una sociedad. Su efecto se relaciona con la experiencia colectiva que construye comunidades políticas” (2006:34). Así, la racionalidad de la colectividad moldea la memoria, a partir de un proceso inacabado y selectivo en el que se asocian distintos fenómenos para producir referentes, los cuales se actualizan constantemente. A pesar de que la memoria colectiva incluye memorias distintas, “la inclusión del ‘todos’ no significa, necesariamente, la construcción de un nosotros colectivo.” La memoria colectiva engendra el poder de construir, reelaborar o inventar un referente, para redefinir una comunidad política, para ser y seguir siendo. “La memoria es producto de la acción del pensamiento histórico, como liberación de acciones colectivas [...] es posibilidad emancipatoria” (Zambrano, 2006:39). Así, la memoria redefine y es redefinida por la comunidad política, la que “existe cuando un número importante de miembros [...] consideran que forman parte de un mismo grupo e imaginan una semejanza de origen y un destino común, y que [...] buscan dominar entre ellos mismos las actividades que tienen por objeto el control de las decisiones grupales” (Zambrano, 2006:40).

Ejército, guerrilla y la guerra contra el narco

La presencia del ejército mexicano en Guerrero se remonta a varias décadas atrás y no puede entenderse sin dos factores: el narcotráfico y los movimientos guerrilleros. Aunque los levantamientos armados del pueblo surgen durante la lucha de independencia en 1810, Jorge Luis Sierra (2007) argumenta que el asalto al Cuartel Madera en Chihuahua por un grupo de jóvenes, el 23 de septiembre de 1965, marca el inicio de la tradición guerrillera socialista en México. A partir de entonces se da una proliferación de movimientos guerrilleros, algunos de los más relevantes con sede en Guerrero, que el gobierno ha combatido con acciones de contrainsurgencia enmarcadas en el Plan DN-II. Bajo este mismo plan, el ejército se ha involucrado de manera creciente en el combate al narcotráfico, con el argumento de que representa una amenaza a la seguridad nacional (SRE, 2007).

Por lo que respecta a los movimientos guerrilleros en Guerrero, Armando Bartra argumenta que las fuertes pugnas caudillistas por el poder han creado una inestabilidad política que se ha acompañado por escasa inversión, nacional y extranjera, en el desarrollo económico, la producción y la infraestructura del estado. Las injusticias socioeconómicas, en un contexto de despotismo gubernamental, se enfrentaron a una intransigencia que reprimió cualquier posibilidad de negociar “y empujó a la oposición política al maximalismo revolucionario” (1996:15).

De acuerdo con el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSOPP) (2004) “cuando el campesinado percibió este uso faccioso del poder en su contra y a favor sólo de los caciques, fue cuando su lucha social se convirtió en política.” Durante la década de 1960, esta oposición política encarnó en los movimientos de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La reacción del gobierno se enmarcó en una lógica de contrainsurgencia bajo el Plan DN-II, que dio lugar a la “guerra sucia” de la década de 1970. La represión violenta y sistemática a la que fueron sometidos los movimientos sociales de este tiempo incluía la utilización de grupos paramilitares, detenciones, tortura, patrullaje y desapariciones, tanto de miembros de los movimientos como de personas sospechosas de

apoyarlos (su base social). En 1968, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) estableció la estrategia que se utilizaría para combatir a las guerrillas, o “gavillas”. De acuerdo con Julio Aranda, el informe pretendía:

formar primero una buena red de información entre los campesinos y pobladores de la región, en los cuales interviene una brigada que sea integradora con elementos de salubridad, despensas alimenticias, auxilios en técnica agraria, etcétera, que corra los pobladores en la sierra quitándoles las banderas a los gavilleros incrustándoles entre la brigada una o dos personas, muy discretas, dedicadas a lograr la información (1999:11).

Mediante esquemas como Operación Amistad² y Operación Telaraña,³ la región se militarizó intensamente y de manera creciente. Para 1971, se calculaba “que el ejército tenía concentrado en Guerrero 24 000 soldados, una tercera parte de todos sus efectivos” (FEMOSOPP, 2004:48). Dos años después, la estrategia del gobierno se transforma “de política de contrainsurgencia a política de genocidio” (FEMOSOPP, 2004:69), y para 1973 las desapariciones forzadas se convirtieron en política de Estado. Cuando el ejército derrotó al movimiento de Cabañas, “su objetivo fundamental en la zona se centró en la aniquilación total de los vestigios de la guerrilla” (FEMOSOPP, 2004:120).

Tras la derrota de los movimientos de Vázquez y Cabañas, continuaron las acciones de insurgencia en la zona. Los enfrentamientos con el gobierno se mantuvieron y el ejército siguió involucrado en la contrainsurgencia. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) apareció

² De acuerdo con el informe de la FEMOSOPP, “la Operación Amistad se realizó del 25 de julio de 1970 al 13 de agosto siguiente, con la participación conjunta de la 35ª y la 27ª Zonas Militares. Oficialmente, la Operación Amistad tuvo una duración de apenas dos semanas y media. Sin embargo, por información recogida en la zona, esta operación se realizó durante mayor tiempo, en una región más amplia y con estrategias y tácticas de contraguerrilla que después se emplearían en la Costa Grande”.

³ Cuando Luis Echeverría asumió la presidencia, en 1970, presentó el Plan Telaraña, el cual especificaba que “la actuación de los elementos militares se regirá por la observancia y la aplicación de procedimientos de operaciones irregulares en su aspecto relativo a contraguerrillas” (FEMOSOPP, 2004:48).

en 1996, con el *Manifiesto de Aguas Blancas*, a un año de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, donde la policía de Guerrero agredió a los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (PDPRV y EPR, 1996). Posteriormente se da una ruptura al interior del EPR y surge el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Al igual que el EPR, el ERPI nace como respuesta del pueblo ante la violencia de las autoridades. En el último caso se trató de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, en 1998. A partir de nuevas escisiones en el EPR y el ERPI, surgen otra serie de organismos y movimientos guerrilleros,⁴ y el ejército mantiene una guerra irregular en la región.

Ante el levantamiento del EZLN, por primera vez el gobierno mexicano invoca el Plan DN-II y abiertamente las Fuerzas Armadas adquieren la misión de combatir la insurgencia civil. El fortalecimiento del ejército continúa durante la administración de Ernesto Zedillo (Ambriz, 1996). Este ejército fortalecido queda a cargo de combatir la insurgencia en todo el país, pero principalmente en Guerrero, con métodos parecidos a los utilizados durante la “guerra sucia” (Gutiérrez, 1998).

En el último sexenio, la militarización, en Guerrero, y en todo el país, se ha intensificado a raíz de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón (Benítez, 2000; Becerril, 2009),⁵ quien

⁴ Algunos de estos grupos son: Comando Justiciero de Liberación Nacional 28 de junio (CJLN 28 de junio) y el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres (CCRP). Para 2000 se forman las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP); Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR); Comando Clandestino Insurgente en Guerrero; Ejército Justiciero del Pueblo Indefenso; Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Oprimidos, entre otros. Aunque estos movimientos actúan en diversos estados, “su epicentro se encuentra en Guerrero” (Lofredo, 2007).

⁵ La militarización, entendida como el aumento en la participación del ejército en tareas de seguridad pública y orden interno, no es una política exclusiva de este sexenio. Desde mediados de la década de 1980 se observa un proceso de remilitarización, después de varias décadas de desmilitarización que siguen a la revolución. A partir de 1994, diversos analistas detectan una “remilitarización” en términos de números de efectivos desplegados y sus funciones en el interior del país. En el último sexenio, el incremento en la participación del ejército en funciones de seguridad pública se ha visto reflejado en el número de tropas desplegadas, así como en iniciativas de reforma de ley propuestas por el poder ejecutivo.

toma esta estrategia como su principal bandera, con el argumento de que “las actividades del narcotráfico plantean una amenaza a la seguridad de México y de los mexicanos. Por esta razón el Gobierno de la República lo combate de manera decidida” (Sedena, 2009). Bajo el esquema del Combate Frontal contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada, las Fuerzas Armadas participan a través de distintas vertientes. Por un lado, continúa el intento de erradicar cultivos con las “Operaciones de Alto Impacto”. Por otro lado, la “Intercepción”, busca evitar el uso del territorio nacional en el tráfico de drogas. “Para el efecto, se despliegan tropas [...] sobre diversas vías de comunicación, estaciones ferroviarias, terminales aéreas y de autobuses” (Sedena, 2009:104). Simultáneamente, ha habido una reestructuración de las Fuerzas Armadas (Laguna, 2008), un aumento en los recursos destinados a la Sedena y un incremento en la presencia del ejército en el país. Todo esto apoyado en la Iniciativa Mérida, firmada en 2007, que asegura la colaboración estadounidense en términos de recursos financieros, equipo y entrenamiento.

Detrás del despliegue de tropas en el territorio mexicano se encuentran una serie de razones políticas y económicas. Independientemente de éstas, Roderic Ai afirma que “a través de la campaña antidroga, el poder militar se ha convertido en la autoridad suprema en algunos estados mexicanos, como Guerrero” (1992:92). Según Aleida Ferreyra y Renata Segura (2000), la existencia de grupos de interés locales y su influencia sobre el ejército a nivel regional explican en gran medida los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en algunas zonas. De ser cierto este argumento, la influencia de narcotraficantes en las divisiones militares regionales podría ser incluso mayor que la de las autoridades políticas. Adicionalmente, hay que considerar a los otros actores que de acuerdo con estas investigadoras están involucrados con el ejército a nivel regional, como los gobiernos municipales y estatales, los caciques, los empresarios, y grupos de delincuencia organizada. La consecuencia de esto es que, a nivel local, el ejército no obedece únicamente a un mandato central, sino que se ve implicado en un complejo entramado de relaciones entre distintos actores y grupos de interés, se vuelve parte del tejido social de una comunidad,

y resulta prácticamente imposible mantener un control central que evite el involucramiento de las tropas en las luchas de poder locales.

Bajo este sistema, los integrantes de las Fuerzas Armadas se involucran en las relaciones dentro de las comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, impactando de distintas maneras el tejido social, la construcción de subjetividades y la capacidad organizativa. Al menos algunos grupos dentro de las comunidades, a través de un proceso selectivo y reflexivo, incorporan o excluyen los recuerdos de distinta manera en la construcción de la memoria colectiva que define a determinada comunidad política.

Los *guachos* en las historias de Ayutla

A pesar del antecedente histórico de la “guerra sucia” en Guerrero y la violenta participación que el ejército tuvo en contra de la población de la región, la manera en la que los habitantes incorporan estos referentes en sus narrativas no siempre es tan evidente. Las referencias explícitas a esta época en las historias de los entrevistados son escasas. En sus discursos, pocas veces se distingue una conexión manifiesta entre la militarización de la zona en la década de 1970 y la ocupación actual, o entre la lógica contrainsurgente del gobierno en ese entonces y las estrategias de mantenimiento del orden público de ahora. En lo que sí coinciden los entrevistados es en que la tendencia general del papel de las Fuerzas Armadas en la región, al menos desde 1998, ha sido expansiva, y que esto ha elevado el contacto entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los habitantes de la región. La mayoría de los entrevistados, cuando habla de los *guachos*, hacen referencia exclusivamente a los últimos diez o quince años.

En otras palabras, la desconfianza de la población civil ayutlense hacia las Fuerzas Armadas no tiene un origen puramente histórico, o no parece estar basada primordialmente en las referencias a la memoria colectiva. La autobiografía es el patrón más fuerte para evaluar la amenaza de este actor externo. Si lo que el ejército genera en los habitantes de Ayutla es miedo y sospecha esto se debe a que, durante su vida, lo han percibido como institución abusiva y temible. Esta

interpretación no proviene, al menos no únicamente, de una memoria social heredada, sino que es una construcción basada en los numerosos abusos que los miembros del ejército han cometido en contra de la población civil.

Debido a estos abusos, en las historias recolectadas, los guachos aparecen como perpetuadores de tres tipos de violencia: física, latente y simbólica (Galindo, 2009). En dichas historias, estos actos no son excepciones individuales o sucesos ocasionales. El ejército no está en Ayutla fortuitamente, los abusos que comete no son accidentales, y las víctimas no son azarosas. La interpretación de estas personas es que el gobierno, en sus distintos niveles, está desarrollando una guerra irregular en la región, con el objetivo de desarticular movimientos sociales que amenazan los intereses de diversas élites poderosas.

La percepción de que en la región existe una guerra irregular da lugar a la concepción de una otredad, una división entre *ellos* y *nosotros*. Esto se refleja en el surgimiento de dos grupos al interior de las comunidades, no necesariamente unitarios, pero en mutua oposición. La pertenencia a un grupo u otro está en función de la manera en la que una persona concibe el ejército y se define con respecto a él. Entre los entrevistados, los que conciben las Fuerzas Armadas como los victimarios, y se definen como víctimas o defensores, entran en la categoría *nosotros*. Por su parte, *ellos* son el gobierno en sus distintos niveles, los militares y cualquiera que los apoye en su estrategia de represión y criminalización de los movimientos sociales.

La mera existencia de un agente represor puede traer consecuencias negativas para una comunidad. Estos efectos se multiplican cuando el agente represor deja de ser un intruso que llega de fuera y logra enterearse en las redes sociales con actores dentro de la comunidad. Esto es, precisamente, lo que ha sucedido en Ayutla. En muchas de las comunidades el ejército se ha incrustado en el tejido social, vinculándose con caciques, empresarios o grupos locales. Ante los ojos de la población entrevistada, estos grupos funcionan como paramilitares que trabajan con el ejército como apoyo en su guerra irregular en contra de algunos movimientos sociales.

La presencia del ejército y los grupos paramilitares, y las acciones que cometen en contra de la población, tienen efectos claros en la

construcción de las subjetividades. Estos efectos se perciben tanto en las narrativas individuales de personas que se sienten avergonzadas y excluidas o que viven con miedo por lo que los guachos puedan hacer a ellos o a sus familiares, como en la construcción de comunidades políticas a partir de las subjetividades de la mitad de los habitantes de un poblado, quienes se describen como pertenecientes a un grupo distinto, y moralmente superior, que el resto.

Se ha argumentado que la memoria colectiva es perfectamente capaz de dar cabida a memorias distintas, pero esto no implica que se construya un *nosotros colectivo* (Zambrano, 2006). El problema de una situación como la de Ayutla, es que está dando lugar al surgimiento de al menos dos comunidades políticas que dividen a la población en bandos antagónicos, mutuamente excluyentes, en lugar de un *nosotros colectivo* que permita imaginar un futuro común. Si bien se podría decir que la disputa entre ambos bandos es coyuntural y reciente, vale la pena preguntarse si existe el riesgo de que el impacto de la separación trascienda lo inmediato. Es decir, que en el proceso selectivo de asociación de los fenómenos por parte de un grupo —en el que se retoman ciertos recuerdos y otros se dejan de lado— se cree una narrativa de antagonismo que prevalezca sobre las referencias comunes, desdibujándolas en el tiempo. Rasgos de este tipo de procesos pueden verse ya en algunas comunidades en Ayutla de los Libres, en las que las rupturas en el tejido social son tan fuertes que las personas parecieran incapaces de ver más allá de los conflictos recientes para encontrar elementos que los unan como integrantes de una misma cultura.

Ejército, subjetividades y memoria

La comunidad de El Camalote, en el municipio de Ayutla de los Libres, tiene 450 habitantes, todos ellos tlapanecos, y se fundó hace casi 40 años por las mismas familias que actualmente la habitan. Esta comunidad ha sido una de las más afectadas por la presencia del ejército, la cual ha producido profundos cambios en el tejido social, particularmente relacionados con la división de la totalidad de la población en dos bandos antagónicos.

En uno de los bandos están todos aquellos pertenecientes a la OPIM, quienes desde 2002 están organizados para combatir la impunidad y exigir justicia ante las violaciones de los derechos humanos, en muchos casos por parte de servidores públicos y fuerzas de seguridad. El otro bando está conformado por la gente cercana a Romualdo Remigio Cantú, cacique local, quien en las historias recreadas para esta investigación aparece invariablemente vinculado al ejército. En esta comunidad, eres OPIM o eres *remigio*. La confrontación no existe exclusivamente en el discurso: ha habido enfrentamientos físicos, que en algunos casos han terminado en la muerte de integrantes de alguno de los bandos.

La separación entre ambos bandos ha sido un proceso gradual que se ha ido expandiendo hacia diversos ámbitos. Empezó por ser un problema de desconfianza, derivado de la sospecha de que uno de los bandos tenía vínculos con los militares de la región. La sospecha provenía de la percepción de cierto favoritismo por parte de las Fuerzas Armadas hacia el cacique local y la gente cercana a él. En las narrativas de los entrevistados, los remigios han recibido tierras, puestos políticos, armas y dinero, a cambio de dar información y “hacer el trabajo sucio” para el ejército. Son acusados de intimidar, amenazar e incluso lastimar a integrantes de la OPIM y sus familiares. El conflicto pronto se acrecentó y causó enfrentamientos violentos. Para finales de 2009, la ruptura se reflejaba en el territorio, el cual había quedado partido:

La comunidad ha cambiado mucho. Antes éramos más unidos. Ahora la separación ha llegado a reflejarse en asuntos tangibles y cotidianos. Vivimos cerca, compartimos los mismos caminos. Pero claro que ya no vas a caminar por el mismo para no pasar por donde están ellos [...] No importa que demos la vuelta, con tal de no verlos, porque si los vemos así de frente puede haber problemas. Ya los ha habido, que luego sacan la pistola o el machete (Entrevista a Serafín García, 2010).

No sólo los caminos están divididos: las tiendas de abarrotes están reservadas para clientes de uno u otro bando, y de las dos canchas de básquetbol, en una se reúnen los remigios, en la otra, los de la OPIM. Y no se mezclan ni por equivocación.

Más allá de la evasión mutua en los espacios públicos, la división ha alcanzado niveles más profundos. En un grupo de enfoque con varios integrantes de la OPIM en 2009, se preguntó qué es lo que tienen en común todos los habitantes de El Camalote durante los conflictos. A pesar de que todos son tlapanecos, que comparten al menos 38 años de historia, que hablan el mismo idioma y celebran las mismas fechas, la respuesta, por unanimidad, fue que actualmente no hay nada que los una. Como puede verse, la división surgida entre los dos bandos representa cambios profundos en las interacciones entre las personas. Las mismas familias que hace cuatro décadas fundaron la comunidad de El Camalote, y que hasta hace poco compartían no sólo espacios públicos, sino incluso sus vidas privadas, hoy buscan a toda costa evitar que sus niños vayan a la misma escuela.

En enero de 2010, los padres de familia pertenecientes a la OPIM dejaron de llevar a sus niños al preescolar y a la primaria bajo el argumento de que los maestros y directores pertenecen al bando de los remigios, han cometido actos discriminatorios en contra de sus hijos, y generan una politización al interior de la escuela que afecta la educación de los niños. A partir de este conflicto, algunos niños de la comunidad han empezado a apropiarse del discurso antagónico de sus padres, refiriéndose a otros niños como remigios. Incluso ha habido casos en los que los propios niños, hijos de integrantes de la OPIM, han levantado denuncias en contra de sus maestros por discriminación y abuso de autoridad.

La situación escolar en El Camalote tiene una implicación importante en términos intergeneracionales. Las generaciones adultas están heredando a sus hijos una historia en la cual El Camalote no es una comunidad, sino dos comunidades políticas en constante enfrentamiento. Los rompimientos se están transmitiendo a una nueva generación cuyas subjetividades se construyen sobre la premisa de que *nosotros* y *ellos* son dos grupos enemigos. Los niños, al menos los más jóvenes, no tienen una historia propia en la cual existe el antes y el después de las divisiones. Muchos quizá no recuerden cómo era su comunidad cinco años atrás. Lo único que tienen son los recuerdos narrados de sus padres. Y si para los adultos es difícil mirar atrás para recordar los tiempos en los que todos se comportaban como

una comunidad, para estos niños será imposible. La fractura en el tejido social se profundiza, la transmisión de la memoria colectiva de la comunidad se interrumpe, y las memorias de los niños son hilos demasiado cortos como para volver a entretrejerse. Las nuevas generaciones están creciendo en una comunidad en la cual la separación interna es parte de la subjetividad, de la memoria colectiva transmitida por sus padres. De continuar así, esto puede resultar peligroso si uno piensa en la posibilidad de resarcir los daños en el futuro y restablecer las relaciones comunitarias lo que eran antes de la aparición de los soldados.

Es necesario destacar que esta división es consecuencia directa de la presencia del ejército en El Camalote, y de las acciones de sus miembros de cara a la comunidad. Es el resultado intencional de una estrategia de gobierno para desarticular los movimientos sociales potencialmente subversivos, en la cual el ejército se alía con ciertos grupos locales de poder para generar conflictos y coartar la capacidad organizativa de la población.

Sin embargo, la situación es más complicada que una mera imposición por parte de un actor externo. Los mismos miembros de la comunidad, al menos los integrantes de la OPIM, se han apropiado de esta división y han acuñado las categorías de *ellos y nosotros*, paramilitares y defensores de derechos humanos, y han fortalecido los estereotipos de unos y otros en los discursos cotidianos. La imagen maniquea de dos bandos en oposición (los buenos y los malos, según uno pertenezca a un lado o el otro del conflicto), se convierte en una narrativa convincente, fácil de transmitir, y útil para sustentar determinadas posiciones políticas.

La construcción de estas comunidades políticas se hace a partir de un ejercicio consciente y reflexivo de asociación de referentes. Ciertos grupos de población dentro de El Camalote llevan a cabo un ejercicio de asociación selectiva de referentes históricos, mediante el cual se redefinen como parte de una comunidad política, distinta y en oposición a otra comunidad política, e imaginan un origen semejante y un destino común, el cual no es compartido con los miembros de la otra comunidad política. De este modo, se construye una memoria colectiva que redefine las identidades políticas y que, según

Zambrano, permite a la comunidad ser y seguir siendo a partir del impulso a las acciones colectivas y de la posibilidad emancipatoria que representa. Sin embargo, cuando los dos grupos pertenecen a un mismo territorio, a un mismo espacio social, la supervivencia de ambos como comunidades políticas depende de que se mantenga la relación antagónica.

El riesgo está, desde luego, en que los referentes comunes —que, de momento, han sido relegados al silencio— se desdibujen a tal grado que en unos años pierdan su carácter de comunes y, por lo tanto, la comunidad pierda su capacidad de imaginar y construir un futuro compartido.

Reflexiones finales

En este texto presenté algunas reflexiones sobre el impacto de la presencia del ejército en la construcción de subjetividades y memoria colectiva en una comunidad indígena rural. Con el caso de una comunidad en Ayutla de los Libres, ejemplifiqué la manera en la que la violencia generada por el ejército, así como la estrategia de infiltración en el tejido social, deriva en la construcción de subjetividades antagónicas dentro de la misma comunidad. Algunos grupos de la comunidad contribuyen a la redefinición de la memoria colectiva a partir de una reflexión selectiva del pasado, que a su vez redefine las identidades colectivas. Así, el ejército y sus aliados son incorporados en algunas narrativas de manera tal que se permite la construcción de un *ellos* y un *nosotros*. La repetición de estas narrativas por parte de diferentes actores implica un riesgo para la capacidad organizativa de la población, actual y futura. Sobre todo porque las generaciones más jóvenes están heredando una memoria colectiva que incorpora este antagonismo entre comunidades políticas, y en la cual los referentes comunes parecieran no tener un lugar.

Lo anterior resulta particularmente riesgoso en un contexto de represión por parte del Estado, debido a que los actos violentos tienen la capacidad de desplazar, al menos en lo inmediato, otros recuerdos u otras formas de reflexionar sobre el pasado. Las historias

no se narran en orden cronológico (la memoria no almacena así los hechos), se narran con base en la significación otorgada a los hechos por el narrador (Hinchman e Hinchman, 1997). Así se construye también la memoria colectiva. Por lo que la violencia perpetrada por los soldados es, claramente, de enorme peso en la construcción de las memorias. Cuando en la mente de las víctimas esta violencia se relaciona con otra persona de su comunidad, estas memorias colectivas estarán definidas en la división de la comunidad en dos bandos antagónicos.

La división de una población en un contexto como el presentado aquí, es resultado de una estrategia del Estado, planeada para desarticular movimientos sociales que resultan incómodos para ciertos grupos de poder. Al igual que durante la “guerra sucia” en la década de 1970, la cooptación por parte del ejército de ciertos grupos dentro de las comunidades, como informantes o incluso como paramilitares, tiene como uno de sus objetivos debilitar las comunidades potencialmente subversivas. En otras palabras, esta división en dos bandos no es un “efecto secundario” de la presencia militar en la región, sino que es parte de sus objetivos. Pero, como se destacó en este texto, los integrantes de la comunidad tienen un papel en la reproducción de estos discursos: su voz en el diálogo construye y reconstruye la memoria colectiva, y la transmite a las siguientes generaciones. Por lo tanto, también tienen el poder de la memoria colectiva para moldear los referentes de forma tal que catalicen las acciones colectivas y transformativas, y de liberarse “de una historia que enajena toda capacidad de acción” (Zambrano, 2006:39).

Más allá del caso específico de Ayutla, si el siguiente gobierno continúa con una estrategia de militarización de la vida pública, la situación en la Costa Chica de Guerrero puede servir como advertencia. En el siguiente sexenio es posible que el gobierno mantenga su presencia o, en el peor de los casos, la incremente, en distintas regiones del país, probablemente acompañado de actos de violencia en un intento por reducir la capacidad organizativa de ciertos grupos de la sociedad. Es labor de la sociedad trabajar en la reconstrucción de memorias colectivas que sean capaces de trascender los choques coyunturales y los problemas inmediatos, para reencontrar el sentido

de comunidad que se esconde en los recuerdos que a veces elegimos no recordar.

Bibliografía

- Ai Camp, Roderic (1992), *Generals in the Palacio: the Military in Modern Mexico*, Oxford University Press, Oxford.
- Ambriz, Agustín (1996), “Ingresó el ejército a la guerra electrónica, con equipo digital para espionaje por satélite y la creación de unidades de transmisiones”, *Proceso*, núm. 1031, 4 de agosto, pp. 10-11.
- Aranda, Julio (1999), “Recomendación de la vieja DRS: Brigadas de ‘ayuda social’, disfraz para infiltrar a las ‘gavillas’ en Guerrero”, *Proceso*, núm. 1197, 10 de octubre.
- Bartra, Armando (1996), *Guerrero bronco: campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande*, Era, México.
- Becerril, Andrea (2009), “Busca Calderón dar al ejército control total de los operativos”, *La Jornada*, 23 de abril. Disponible en [<http://www.jornada.unam.mx/2009/04/23/index.php?section=politica&article=005n1pol>].
- Benítez Manaut, Raúl (2000), “Las fuerzas armadas mexicanas a fin de siglo”, *Fasoc*, vol. 15, núm. 1, pp. 13-28.
- Ferreira, Aleida y Renata Segura (2000), “Examining the Military in the Local Sphere”, *Latin American Perspectives*, vol. 111, núm. 27, pp. 18-35.
- Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) (2004), Informe Documenta 18 Años de “Guerra Sucia” en México. Disponible en [<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/>].
- Galindo, Jorge (2009), “Apuntes para una sociología de la violencia”, en Mario Barbosa y Zenia Yébenes (eds.), *Silencios, discursos y miradas sobre la violencia*, Anthropos, Barcelona, pp. 201-32.
- Gutiérrez, Maribel (1998), *Violencia en Guerrero*, La Jornada Ediciones, México.
- Hinchman, Lewis P. y Sandra K. Hinchman (eds.) (1997), *Memory, Identity, Community: The Idea of Narrative in the Human Sciences*, SUNY Press, Nueva York.
- Ipsos-Bimsa y *El Universal* (2007), “Encuesta Nacional Ipsos-Bimsa/*El Universal*: Imagen del Ejército Mexicano”. Encuesta nacional cara a

- cara, levantada del 4 al 9 de agosto. Disponible en [<http://www.ipsos-bimsa.com.mx/common/download.aspx?DocumentId=145>].
- Laguna, Mauricio (2008), “Reorganizan marina para combate a narcotráfico”, *Contralínea México*, vol. 5, núm. 93, enero. Disponible en [<http://www.voltairenet.org/article155712.html>].
- Lofredo, Jorge (2007), “La otra guerrilla mexicana. Aproximaciones al estudio del Ejército Popular Revolucionario”, *Desacatos*, núm. 24, mayo-agosto, pp. 229-246. Disponible en [<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/139/13902412.pdf>].
- Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y Ejército Popular Revolucionario, (EPR) (1996), “Manifiesto de la Sierra Madre Oriental”, *El Insurgente*, núm. 1, septiembre, p. 8.
- Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) (2009), “La cooperación internacional antinarcóticos y la Iniciativa Mérida: antecedentes”, julio, México. Disponible en [<http://www.iniciativamerida.gob.mx/pdf/antecedentes-cooperacion.pdf>].
- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (2007), “Iniciativa Mérida: Un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”, octubre, México. Disponible en [<http://portal.sre.gob.mx/eua/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=334>].
- Sierra Guzmán, Jorge Luis (2007), *El enemigo interno: contrainsurgencia y Fuerzas Armadas en México*, Plaza y Valdés, México.
- Zambrano, Carlos (2006), *Memoria colectiva y comunidad política. Prope-
dética etnográfica constructivista*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Entrevista

Entrevista a Serafín García, integrante de la OPIM, Ayutla de los Libres, Guerrero, enero 2010.

Recibido el 29 de febrero de 2012.

Aprobado el 19 de junio de 2012.